



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010034105 DEL 31/07/2014
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual "se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que "La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de CAJICÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, es de categoría 3 y para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010017955, del 29 de mayo de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de CAJICÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 2° del Decreto 1639 de 2013:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Reporte al SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya. En caso de no poder acreditar el criterio de la forma descrita, podrá:

- a) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o,
- b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010017955, del 29 de mayo de 2014.

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010017955, del 29 de mayo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de CAJICÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, mediante el oficio No. SSPD 20144010287261, del 29 de mayo de 2014 enviado por correo certificado el 05 de junio de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Atendiendo la anterior citación, compareció ante esta entidad el día 25 de junio de 2014, el doctor Juan Carlos Espitia Arévalo, como apoderado especial del municipio de CAJICÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, quien se notificó en forma personal del citado acto administrativo.

Ahora bien, el doctor Juan Carlos Espitia Arévalo, en su calidad de apoderado del municipio de CAJICÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, mediante documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20145290366072, del 10 de julio de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010017955, del 29 de mayo de 2014.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**3.1. Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del C.P.A.C.A., establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de CAJICÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20145290366072, del 10 de julio de 2014, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2. Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del apoderado del ente municipal:

"4. Que respecto del literal primero del considerando cuarto de la resolución de la referencia, señalamos que no existe ningún incumplimiento por parte del Municipio de Cajicá quien dentro del procedimiento de transferencias de subsidios en el año 2012 cumplió con el procedimiento de aplicación de los factores de subsidio según el acuerdo municipal No. 2 del 2011. Toda vez que dicho acuerdo se acogió íntegramente a los lineamientos del estatuto de los servicios públicos domiciliarios, se acogió al artículo 99 de la precitada ley.

5. Que se resalta que el acuerdo municipal No 2 del 2011 cuestionado por el despacho del Superintendente, cumple íntegramente con las previsiones expuestas en el artículo 99 de la ley 142 de 1994 el cual nos indica que todas las disposiciones de la misma norma hace relación exclusiva a los subsidios que se conceden o pueden concederse en los respectivos presupuestos de las entidades territoriales y descentralizadas a las cuales se refieren el artículo 368 de la Constitución Nacional.

6. Que así las cosas, y teniendo en cuenta el debido proceso cumplido por el Honorable Concejo de Cajicá, y la administración municipal de Cajicá como ha quedado ampliamente probado, bajo ningún supuesto de hecho o de derecho no es factible motivarse o definirse ningún incumplimiento por parte del Municipio de Cajicá, quien para el año 2012 y en seguimiento al citado Decreto 565 de 1996 y regido por el artículo 99 de la Ley 142 de 1994 oportunamente se transfirió la totalidad de recursos causados por subsidio que efectivamente genero (sic) la empresa EPC S.A ESP por la prestación de los servicios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 como así lo prueba la certificación adjunta la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A.E.S.P.

SUSTENTACIÓN (sic) DEL RECURSO

Tiene sustento el presente recurso en el hecho de que si bien es cierto el Acuerdo No. 02 del 24 de Mayo de 2011, no se encuentra de conformidad con lo establecido por la ley 1450 de 2011, también lo es que tiene tal situación explicación en el hecho de que al momento de la expedición de este acto administrativo dicha norma no existía por lo tanto no existiendo imperativo legal al cual se acomodara el acuerdo en mención; no obstante lo anterior respecto de este punto tenemos que el acuerdo 02 del 24 de Mayo de 2011, y al cual se hace alusión en el literal primero del considerando cuarto de la resolución de la referencia, señalamos que no existe ningún incumplimiento por parte del Municipio de Cajicá quien dentro del procedimiento de transferencias de subsidios en el año 2012 cumplió con el procedimiento de aplicación de los factores de subsidio según el acuerdo municipal No. 2 del 2011. Toda vez que dicho acuerdo se acogió íntegramente a los lineamientos del estatuto de los servicios públicos domiciliarios, se acogió al artículo 99 de la precitada ley que a la letra expone. " Formas de Subsidiar. Las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas:

Debe indicar específicamente el tipo de servicio subsidiado.

Se señalará (sic) la entidad prestadora que repartirá el subsidio.

El reparto debe hacerse entre los usuarios como un descuento en el valor de la factura que éste debe cancelar, conforme a lo dispuesto en esta ley y en las ordenanzas y acuerdos según el caso.

El presidente y los gobernantes podrán suspender a los alcaldes cuando sean negligentes en la aplicación de las normas relativas al pago de los subsidios; o cuando las infrinjan de cualquier otra forma.

Los subsidios no excederán, en ningún caso, del valor de los consumos básicos o de subsistencia. Los alcaldes y concejales tomarán las medidas que a cada uno correspondan para crear en el presupuesto municipal, y ejecutar apropiaciones para subsidiar los consumos básicos de acueducto y saneamiento básico de los usuarios de menores recursos y extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, dando prioridad a esas apropiaciones, dentro de las posibilidades del municipio, sobre otros gastos que no sean indispensables para el funcionamiento de éste. La infracción de este deber da lugar a sanción disciplinaria.

La parte de la tarifa que refleje los costos de administración, operación y mantenimiento a que dé lugar el suministro será cubierta siempre por el usuario; La que tenga el propósito de recuperar el valor de las inversiones hechas para prestar el servicio podrá ser cubierta por los subsidios, y siempre que no lo sea, la empresa de servicios públicos podrá tomar todas las

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

medidas necesarias para que los usuarios las cubran. En ningún caso el subsidio será superior al 15% del costo medio del suministro para el estrato 3, al 40% del costo medio del suministro para el estrato 2, ni superior al 50% para el estrato 1.

Los subsidios solo se otorgaran (sic) a los usuarios de inmuebles residenciales y a las zonas rurales de los estratos 1 y 2; las comisiones de regulación definirán las condiciones para otorgarlos al estrato 3.

99. Cuando los concejos creen los fondos de solidaridad para subsidios y redistribución de los ingresos y autoricen el pago de subsidios a través de las empresas pero con desembolso de los recursos que manejen las tesorerías municipales, la transferencias de recursos se harán en un plazo de 30 días, contados desde la misma fecha en que se expida la factura a cargo del municipio. Para asegurar la transferencia, las empresas firmarán contratos con el municipio.

Los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asignarán, preferentemente, a los usuarios que residan en aquéllos municipios que tengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios ingresos. En consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica(...) "Negrilla fuera de texto-

Se resalta que el acuerdo municipal No 2 del 2011 cuestionado por el despacho del Superintendente, cumple integralmente con las previsiones expuestas en el artículo 99 de la ley 142 de 1994 el cual nos indica que todas las disposiciones de la misma norma hace relación exclusiva a los subsidios que se conceden o pueden concederse en los respectivos presupuestos de las entidades territoriales y descentralizadas a las cuales se refieren el artículo 368 de la Constitución Nacional.

No obstante lo anterior, resultando el seguimiento a los requerimientos legales que prescribe la norma citada y reguladora de los factores máximos de subsidios, en sentencia C-566 de 30 de noviembre de 1.995, al declarar la constitucionalidad del numeral 99.6 del artículo 99 de la ley 142, de 1994, la Corte Constitucional señaló (sic)... "(...) Desde el punto de vista jurídico, el subsidio parcial es fruto de un legítimo juicio de ponderación realizado por el legislador entre principios concurrentes. Ante la imposibilidad de elevar a un grado absoluto la vigencia efectiva de un solo principio prescindiendo de los demás, se optó por una aproximación de equilibrio que lleva sólo hasta cierto grado su aplicación simultánea.

En realidad, una alternativa maximalista de la igualdad - subsidio total -, habría conducido a un sacrificio muy grande del principio de eficacia en la prestación de servicios públicos que exige que la reposición de los costos y la obtención de un determinado margen se garanticen a las empresas públicas y privadas que se ocupan de los servicios públicos. Por contera, habría significado un despliegue excesivo y tal vez inequitativo del principio de redistribución de ingresos, pues la principal fuente de financiación del gasto público correlativo al subsidio la constituye los gravámenes que se imponen a los usuarios de los estratos altos cuya capacidad contributiva tiene un límite racional".

Por lo anterior, como alternativa del equilibrio entre los principios, parece a juicio de la Corte la más razonable. La premisa de esta escogencia del Legislador en el artículo 99 de la ley 142 de 1994 consiste en limitar el monto del subsidio a un nivel que pueda sufragarse con cargo principal a los gravámenes que se imponen a los usuarios de los estratos altos.

Concluye la Honorable Corte Constitucional que si bien el legislador autorizó la concesión de un subsidio sólo parcial en favor de las personas de menores ingresos estratos 1,2 y 3 destinados a pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas, no vulnera principios constitucionales de igualdad ni de la cláusula del Estado social del derecho.

Consecuentemente con la regulación del factor de subsidios y contribuciones, la ley 1450 del 2012 expuso en el artículo 125 respecto a Subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.

Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%).

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2, 16 y 87.3 de la Ley 142 de 1994, los usuarios de servicios suministrados por productores de servicios marginales independientes o para uso particular, y ellos mismos en los casos de autoabastecimiento, en usos comerciales en cualquier clase de suelo y de vivienda campestre en suelo rural y rural suburbano deberá hacer los aportes de contribución al respectivo fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, en los porcentajes definidos por la entidad territorial. La Comisión de Regulación de Agua Potable Saneamiento Básico regulará la materia (...).

Por lo anteriormente expuesto es claro que la función del concejo Municipal de generar los factores de subsidio y contribuciones fue ampliamente acogida en el acuerdo Municipal No 02 del 2011 quien como así lo prueba el texto del mismo acuerdo municipal, sus factores se encuentran acordes con el artículo 99 de la ley 142 de 1994 y para ningún efecto violó (sic) la norma posterior definida como la ley 1450 del 2011, toda vez que el propio concejo municipal de Cajicá generó (sic) los factores de subsidios que igualmente reguló (sic) la ley 1450 de 2011 sin exponer ninguna decisión del acuerdo a ningún evento de ilegalidad o incumplimiento. sino todo lo contrario, la ley 1450 del 2011 generó (sic) opciones de mayor porcentaje en subsidios a los establecidos previamente por el precitado acuerdo municipal.

Por su parte, el artículo 11 del decreto 565 de 1996, señala respecto a las transferencias de dinero de las entidades territoriales, que "Las transferencias de dinero de las entidades territoriales a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos por conceptos de subsidios, deberán ser giradas a la entidad prestadora del servicio público para la aplicación de los subsidios, en un plazo de treinta días, contados desde la misma fecha en que la entidad prestadora expida la factura a cargo del municipio (artículo 99.8 de la Ley 142 de 1994).

Para asegurar esta transferencia, los recursos destinados a otorgar subsidios, y que provengan de las tesorerías de las entidades territoriales, deberán ceñirse en su manejo a las entidades en el contrato que para el efecto debe suscribirse entre el municipio, distrito, o departamento y las entidades encargadas de la prestación de los servicios públicos, en el que, entre otros, se establecerán los intereses de mora.

Los alcaldes y concejales deberán dar prioridad a las apropiaciones para los servicios de acueducto y alcantarillado, sobre otros gastos que no sean indispensables para el funcionamiento del ente territorial respectivo (artículo 99.5 de la Ley 142 de 1994).

Así las cosas, y teniendo en cuenta el debido proceso cumplido por el Honorable Concejo de Cajicá, y la administración municipal de Cajicá como ha quedado ampliamente probado, bajo ningún supuesto de hecho o de derecho no es factible motivarse o definirse ningún incumplimiento por parte del Municipio de Cajicá, quien para el año 2012 y en seguimiento al citado Decreto 565 de 1996 y regido por el artículo 99 de la Ley 142 de 1994 oportunamente se transfirió la totalidad de recursos causados por subsidio que efectivamente generó (sic) la empresa EPC S. A ESP por la prestación de los servicios a los usuarios de estratos 1,2 y 3 como así lo prueba la certificación adjunta por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A ESP., entendiéndose finalmente que dicho acto administrativo se encuentra revestido de la presunción de legalidad mientras no sea anulado por la jurisdicción administrativa.

Por lo anteriormente expuesto resulta procedente solicitar sea revocado el acto administrativo objeto de recurso".

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado No. SSPD 20145290366072, del 10 de julio de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegó como prueba, copia de la Resolución No. SSPD 20144010017955, del 29 de mayo de 2014, por medio de la cual la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de CAJICA, del departamento de CUNDINAMARCA.

El anterior documento, en su valor integral, se anexa al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito: Reporte al SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo.

Frente a este criterio, alega el municipio que lo cumplió, por cuanto señala que el Acuerdo Municipal No. 02 del 24 de mayo de 2011, expedido por el Concejo Municipal, se encuentra acorde con el artículo 99 de la ley 142 de 1994 *"y para ningún efecto violó (sic) la norma posterior definida como la ley 1450 del 2011, toda vez que el propio concejo municipal de Cajicá generó (sic) los factores de subsidios que igualmente reguló (sic) la ley 1450 de 2011 sin exponer ninguna decisión del acuerdo a ningún evento de ilegalidad o incumplimiento, sino todo lo contrario, la ley 1450 del 2011 generó (sic) opciones de mayor porcentaje en subsidios a los establecidos previamente por el precitado acuerdo municipal"*.

Frente a los anteriores argumentos, esta entidad entra a dar respuesta, en primer lugar y por metodología, al segundo, así:

El proceso de certificación para la administración de los recursos del SGP-APSB, lo adelanta esta SSPD con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007. En tal virtud, debe verificar que los municipios y distritos hayan cumplido con los criterios establecidos en el Decreto 1639 de 2013, *"en el año calendario inmediatamente anterior"*; es decir, para el proceso de certificación anual que se adelanta respecto de la vigencia 2012, esta entidad revisó en el año 2013, que se acreditaran dichos criterios por parte de los entes territoriales.

Ahora bien, la Ley 1450 de 2011 es un acto administrativo de carácter general, que fue expedida el 16 de junio de 2011, entró en vigencia en la misma fecha, y fue publicada en el Diario Oficial 48102, del 16 de junio de 2011.

Por ser un acto de carácter general, el artículo 65 del C.P.A.C.A. señala que *"(...) no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales según sea el caso (...)"*.

En estas condiciones tenemos que la Ley 1450 de 2011, al haber sido publicada en el Diario Oficial 48102, del 16 de junio de 2012, cumplió con el principio de la publicidad y con ello originó su fuerza vinculante, es decir, se tornó obligatoria y oponible a terceros; así lo ha entendido el Consejo de Estado, expediente 11001-03-28-000-2009-00005-00 del 6 de agosto de 2009, al señalar que: *"Lo dicho permite concluir a la Sala que la publicación de los actos administrativos de contenido general se constituye en presupuesto de eficacia u oponibilidad y no de validez respecto de los mismos"*.

¹ Artículo 1° del Decreto 1639 de 2013.

Ahora bien, dentro de los requisitos por cumplir, se encuentra el establecido en el artículo 3° del Decreto 1639 de 2013, el cual dispone: *"Reporte al SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complementé o sustituya".* (Énfasis añadido).

En ese orden de ideas, la reglamentación que la citada Ley realizó en materia de subsidios y aporte solidario, debía ser aplicada a partir de su entrada en vigencia, es decir, desde el 16 de junio de 2011, y fue así como el legislador dispuso que a partir de la expedición de la Ley 1450 de 2011, los acuerdos que fijaran los porcentajes de subsidios y contribuciones tienen una vigencia igual a cinco años, pero los factores pueden modificarse, si varían las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones.

Así mismo, dicha norma estableció los rangos de porcentajes máximos de subsidios y mínimos de aporte solidario que deben tener en cuenta los Concejos Municipales al fijar dichos factores.

Ahora, verificada nuevamente la información del Sistema Único de Información (SUI), esta entidad encontró que el ente territorial reportó el 29 de agosto de 2013 el Acuerdo No. 02 de 2011, mediante el cual se aprobaron los porcentajes de subsidio y aporte solidario en el municipio.

Se observa que este acto se expidió el 24 de mayo de 2011, es decir, antes que entrara a regir la Ley 1450 de 2011, razón por la que la vigencia de dicho Acuerdo Municipal era anual. (Decreto 1013 de 2005), y por ello no adquirió la vigencia automática de 5 años de que trata la Ley 1450 de 2011; por consiguiente, atendiendo que para el año 2012 ya estaba vigente la Ley 1450, el ente territorial a través del Concejo Municipal debió expedir para el año 2012 el mencionado Acuerdo, con base en los lineamientos establecidos por dicha norma.

Así las cosas, por cuanto el Decreto 1639 de 2013 dispone que el pluricitado acto debe *"estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011"*, esta superintendencia no puede acreditar el cumplimiento de este criterio con un Acuerdo Municipal que no se ajusta a las previsiones de la referida Ley, como quedó evidenciado. Lo anterior, sin que se esté realizando un juicio de legalidad frente a dicho acto, como lo señala equivocadamente el recurrente, toda vez que la función de esta entidad es verificar que la información que reporten los municipios y distritos al SUI, cumpla con lo ordenado por el Decreto 1639 de 2013.

Adicionalmente, y dado que el recurrente no señaló argumentos en contra de los criterios subsidiarios del reporte en el SUI del "Formato Balance entre subsidios y contribuciones" y en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia 2012, esta superintendencia reitera lo indicado en la Resolución No. SSPD 20144010017955, en la cual se determinó el incumplimiento del criterio por parte de la administración de CAJICÁ, departamento de Cundinamarca.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del criterio que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por doctor Juan Carlos Espitia Arévalo, como apoderado del municipio de CAJICÁ, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010017955, del 29 de mayo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de CAJICÁ, del departamento de CUNDINAMARCA, ó al doctor Juan Carlos Espitia Arévalo, como apoderado del municipio de CAJICÁ, haciéndoles entrega de una copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de CUNDINAMARCA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Ingrid Samantha Norato - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Visto Bueno: Martha Lucía Durán - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Angela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094012551380576A